

# LAS FUERZAS ARMADAS DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CENTRO AMERICA

Richard L. Millett

## RESUMEN

*En el presente trabajo se analiza la influencia de los Estados Unidos de Norteamérica en el desarrollo de las fuerzas militares de los distintos países de la América Central durante los últimos veinte años. El autor inicia su estudio con una breve alusión a la influencia norteamericana durante la primera mitad del siglo XX para centrar toda su atención en el variado proceso que se inicia en el intento de invasión a Cuba en 1961 y se extiende hasta el momento presente. El estudio presta particular atención a la actitud asumida por las administraciones de los presidentes Carter y Reagan frente a los militares de la región centroamericana. El autor considera que los resultados del influjo militar norteamericano en Centroamérica, desde todo punto de vista, es muy poco satisfactorio.*

## 1. Introducción

La participación e influencia de los Estados Unidos en las fuerzas armadas de Centro América tiene una larga, aunque no tan exitosa, historia. Esto se debe, en gran parte, a la convergencia de dos factores: la política de los EE. UU., vigente ya por largo tiempo, orientada a ejercer una influencia predominante en la región, y la tradición (con la notable excepción de Costa Rica) de dominio militar en la política interna de los países del área. Para el propósito de este trabajo Centro América constará de las cinco Repúblicas incluídas en el Mercado Común Centroamericano. Panamá y Belize no serán consideradas directamente.

## 2. Del Siglo XIX a la Revolución Cubana.

Durante el Siglo XIX la influencia de los Estados Unidos en las fuerzas armadas centroamericanas fue limitada. Instructores chilenos, españoles y alemanes intervinieron en el establecimiento de academias militares en Guatemala, Salvador y Nicaragua. La mayor parte del escaso equipo que poseían estas academias provenía de Europa. Esta situación empezó a cambiar a comienzos del Siglo XX debido a una variedad de acontecimientos, entre los

cuales se cuentan la construcción del Canal de Panamá, la primera intervención estadounidense en Nicaragua (1.912) y la interrupción de la influencia europea ocasionada por la Primera Guerra Mundial. Los esfuerzos iniciales de la política de los Estados Unidos se concentraron en la reducción o eliminación de otras influencias extranjeras sobre las fuerzas armadas centroamericanas, y, posteriormente, hacia los años veinte, en la adaptación de las fuerzas armadas del área de las de Washington.

En 1923 el Departamento de Estado presionó a los gobiernos centroamericanos para que firmasen un tratado en el que se comprometían a crear una "fuerza de policía militar no guerrillera", con la ayuda de adecuados instructores extranjeros<sup>1</sup>. Era obvio que a los ojos de Washington, sólo Nicaragua llevó a cabo tal política, y fue ahí donde tuvo lugar otra intervención importante de los Estados Unidos y el desarme forzoso de las organizaciones militares existentes. La creación de la Guardia Nacional y su transformación ulterior en un instrumento de la familia Somoza produjo el más visible, si no el más exitoso, ejemplo de la influencia estadounidense sobre las fuerzas armadas del área, antes de la segunda guerra mundial.

Una nueva era se inició con la irrupción de la Segunda Guerra Mundial. Preocupado por el mantenimiento de rutas de navegación marítima, la defensa del Canal de Panamá y la garantía de acceso regular a materias primas, el gobierno de los Estados Unidos suministró importante entrenamiento militar, equipo, provisiones y hasta instructores para varias academias militares nacionales. El resultado fue un incremento muy significativo del contacto directo entre los oficiales estadounidenses y centroamericanos, un mejoramiento tanto del equipo como del entrenamiento de los ejércitos de la región, así como una notable mejora de las fuerzas aéreas locales. La exposición constante a ideas foráneas y a la propaganda democrática de los tiempos de la guerra, emanadas de Washington, influyó en el modo de pensar de los oficiales jóvenes y contribuyó al derrocamiento de los regímenes dictatoriales existentes por largo tiempo, en Guatemala y El Salvador.

Su preocupación por Europa y Asia produjo una disminución del interés estadounidense en Centro América, desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de los años 50. Sin embargo, la presunta influencia comunista en el gobierno del Coronel Jacobo Arbenz en Guatemala motivó un dramático cambio en esta política. En 1954 los Estados Unidos firmaron pactos de ayuda mutua con Honduras y Nicaragua, y enviaron grandes cantidades de armamento a ambos países, con la expectativa de que parte considerable de este armamento pasase a los grupos anti-Arbenz en exilio<sup>(2)</sup>. Se presentó una situación embarazosa cuando el General Somoza utilizó la cuota de armamento de Nicaragua para tratar de derrocar el gobierno democrático de la vecina Costa Rica, pero tal intento falló y la ayuda militar continuó. En 1955 Guatemala, por ese entonces salvaguardada por un régimen militar proamericano, se sumó a la lista de naciones firmantes de los Pactos de Defensa Mutua con Estados Unidos.

Un hecho resultante de este renovado interés en las fuerzas armadas centroamericanas, fue el envío de misiones de la Fuerza Aérea y de la Armada norteamericana a Centro América. El embajador norteamericano Mural Williams, comentó que cuando él llegó a El Salvador en 1961 "El número de hombres de la Misión de la Fuerza Aérea era aún mayor

1. Richard Millett, *Guardians of the Dynasty* (New York, 1977), pp. 41-42.

2. Edwin Lieuwen, *Arms and Politics in Latin America*, (New York, 1960).

que el de pilotos o aviones locales<sup>3</sup>. La ayuda militar fue aumentada tanto en equipo como en entrenamiento, y muchos oficiales centroamericanos fueron entrenados fuera de sus propios países. Lo más importante en esta área fue la Escuela de las Américas, ubicada en la zona del Canal de Panamá. Esta había sido establecida en 1946, pero se amplió rápidamente hacia finales de la década del 50 y empezó a ofrecer toda su instrucción en Español en 1954<sup>4</sup>. En términos económicos, sin embargo, la ayuda militar a esta región desde 1953 a 1961 no tuvo mayor significación, pues fue evaluada en sólo US\$5,300,000<sup>5</sup>.

### 3. De John Kennedy a Gerald Ford.

La tensión creciente entre Estados Unidos y el régimen revolucionario de Fidel Castro en Cuba, cambió dramáticamente este patrón en los años 60. Guatemala y Nicaragua proveyeron las bases para la desafortunada invasión de Bahía Cochinos en 1961, y en su turno Castro respaldó los esfuerzos guerrilleros para derrocar a estos gobiernos. La administración Kennedy procedió a revisar las políticas estadounidenses respecto de las fuerzas armadas de Latinoamérica, y finalmente produjo una política diseñada tanto a contrarrestar la posible influencia cubana, como a promover la participación de los militares en los esfuerzos del desarrollo nacional. El resultado fue una combinación de ayuda intensificada con énfasis anti-revolucionario, un programa de apoyo a gobiernos democráticos y de oposición a golpes de Estado militares, así como un gran énfasis en el desarrollo de programas militares de acción cívica. Se ofreció, además, entrenamiento y otro tipo de ayuda a la policía y a otras fuerzas de seguridad con el ánimo de promover la estabilidad interna.

Las fuerzas armadas centroamericanas acogieron la doctrina de acción cívica con entusiasmo, pero con resultados internos discutibles<sup>6</sup>. La ayuda militar concedida por los Estados Unidos aumentó rápidamente y alcanzó la cifra de US\$20.100.000, distribuidos entre las cinco naciones, durante los años fiscales de 1962 a 1965. Inclusive Costa Rica, que no tiene ejército, recibió US\$1.400.000 durante este período<sup>7</sup>. Estas sumas no incluyen la ayuda a las fuerzas de seguridad costarricenses ni las ventas de equipo en efectivo a las naciones del área, las cuales ascendieron a más de US\$5.600.000 entre 1950 y 1968<sup>8</sup>.

Estos esfuerzos parecían ser productivos hacia la segunda mitad de la década. En efecto, los movimientos guerrilleros en Guatemala y Nicaragua habían sido controlados con éxito; el desarrollo económico, impulsado mediante la creación del Mercado Común Centroamericano, avanzaba satisfactoriamente, y, a pesar del fracaso de los esfuerzos para evitar un golpe de estado en Honduras en 1963, parecía haber algún progreso hacia

3. *Washington Post*, March 15, 1980.

4. Sgto. Hector Rosado, "Aniversario de la Escuela de las Américas", *Adelante* (1980), p. 46.

5. Agency for International Development, *U.S. Overseas Loans and Grants and Assistance from International Organizations: Obligations on Loan Authorizations, July 1, 1945 - September 30, 1980* (Washington, D.C., 1981), passim.

6. Willard F. Barber and C. Neale Ronning, *Internal Security and Military Power* (Columbus, Ohio, 1966), pp. 126-34.

7. Don L. Etchison, *The United States and Militarism in Central America* (New York, 1975), p. 95.

8. *Ibid.*, p. 98.

la formación de más gobiernos representativos en la Región. La participación de unidades de Nicaragua, Honduras e inclusive Costa Rica, en las fuerzas de la OEA enviadas a la República Dominicana en 1965, por solicitud de los Estados Unidos, constituyó un éxito adicional para este país.

Otro resultado de la influencia de los Estados Unidos, en este período, fue la creación del Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA). Esta organización se estableció en 1964, con estímulo y respaldo considerables por parte de los Estados Unidos. Encargado de planificar y promover la seguridad colectiva en la región, CONDECA disfrutó inicialmente de la participación y respaldo de todas las Repúblicas de Centro América, excepto Costa Rica, y realizó su primer ejercicio conjunto de defensa en 1965 con la ayuda de los Estados Unidos<sup>9</sup>.

El éxito aparente de esta política llegó a un rápido fin hacia finales de la década del 60 y comienzos de la del 70. Los factores decisivos fueron el impacto del conflicto de Viet Nam en los Estados Unidos y la influencia perturbadora de la guerra entre Honduras y El Salvador en 1969. Este último incidente condujo a un virtual estancamiento de las funciones del CONDECA, deterioró la economía de toda la región y colocó a los Estados Unidos en la situación embarazosa de tener misiones militares de importancia anexas a los ejércitos de cada uno de los bandos en contienda.

Viet Nam hizo que tanto el interés como los fondos norteamericanos se retiraran de Centro América y finalmente produjo una reacción contra la participación de los Estados Unidos en regímenes dictatoriales foráneos. El congreso prohibió cualquier ayuda directa adicional a las fuerzas policivas de otras naciones, determinación está que virtualmente terminó con los programas de ayuda a Costa Rica, y las administraciones Nixon y Ford empezaron a reducir la magnitud de las misiones militares en todo el mundo. Las misiones del ejército y de la fuerza aérea fueron fusionadas y su fuerza combianada se redujo notablemente en toda Centro América. El suministro de equipo militar fue también reducido continuamente en Centro América hasta desaparecer por completo hacia mediados de la década del 70. De los antiguos programas sólo quedaron pequeños préstamos para financiar las compras de equipos norteamericanos, y algunos fondos limitados para entrenamiento militar, la mayoría de los cuales fue administrada por la Escuela de las Américas. En 1977 los préstamos ascendían a un total de US\$10.000.000, la mitad de los cuales se destinó a Costa Rica, y los fondos de entrenamiento sumaron US\$2.200.000, pero de ellos no participó Costa Rica<sup>10</sup>. La cuantía de los fondos IMET fue reducida aún más, debido a que el cambio de los procedimientos incrementó dramáticamente los costos de la instrucción en bases militares Estadounidenses. Hacia finales de la década del 70 el envío de un oficial latinoamericano al Command and General Staff College en Fort Leavenworth era, utilizando los fondos IMET, considerablemente más costoso que el sostenimiento del mismo Oficial durante un año en la Universidad de Harvard. En el caso de que no hubieren fondos IMET disponibles, el costo era tres veces mayor que el de estudiar en Harvard. En la Escuela de las Américas el costo era considerablemente menor, pero aún así el pago de un curso del Command and General Staff, hacia finales de los años 70, representaba unos US\$3.000 en fondos IMET<sup>11</sup>.

9. Gabriel Aguilera Peralta, *La integración militar en Centroamérica* (sp., sf.), pp. 54-59. Etchison, pp. 64-65.

10. Agency for International Development, *passim*.

11. Information furnished to me at the School of the Americas, November, 1980.

#### 4. La administración Carter

El advenimiento de la administración Carter, caracterizada por el énfasis en los derechos humanos en su política hacia Latinoamérica, parecía prometer una agilización de la tendencia hacia la reducción de la ingerencia de los Estados Unidos en las fuerzas armadas de Centro América. Con el fin de limitar la asistencia militar y dar así crédito a la política de los derechos humanos, la nueva administración se comprometió además a reducir el papel de los Estados Unidos como abastecedor de armas al Tercer Mundo. En Centroamérica esto había venido ya sucediendo durante toda la década del 70. En efecto, entre 1967 y 1976 Honduras y El Salvador compraron menos de un tercio de su equipo militar a los Estados Unidos. Guatemala y Nicaragua siguieron considerando a Washington como su más importante proveedor de armamento, pero aún ellos comenzaron a diversificar sus compras<sup>12</sup>.

La reducción de la ayuda estadounidense y la disponibilidad creciente de otras fuentes de abastecimiento de armas, entre las cuales se destacan Israel, Francia, Brasil y Argentina, trajeron como resultado la disminución de la capacidad de influencia de los Estados Unidos sobre la acción militar y la política de Centroamérica. Esto se hizo palpable en 1977 cuando, en respuesta a la presión de Estados Unidos para que se mejoraran las prácticas en relación con los derechos humanos, tanto Guatemala como El Salvador abolieron los acuerdos de asistencia militar existentes con los Estados Unidos. Honduras y Nicaragua continuaron recibiendo ayuda limitada, pero el conflicto de la administración Carter con el régimen dictatorial de Somoza y la escalada de la contienda civil en Nicaragua llevaron primero a una suspensión temporal y finalmente a la cancelación total de la ayuda militar, del entrenamiento y de las ventas. Hacia 1979, Honduras era la única nación en la región que continuaba recibiendo fondos IMET y préstamos para la compra de equipo, pero inclusive éstos habían sido reducidos a sólo US\$300.000 en fondos IMET y a US\$2.000.000 en préstamos que fueron suministrados durante el año fiscal de 1979<sup>13</sup>. Esta política fue severamente cuestionada al presentarse el colapso del régimen de Somoza y el triunfo de los Sandinistas en Nicaragua, en julio de 1979.

La preocupación por la Seguridad de Centroamérica, el temor por el aumento de la influencia cubana, las reacciones adversas de la opinión local y la disminución de la importancia adjudicada a los Derechos Humanos en la formulación de las políticas de la administración Carter, se combinaron para producir un giro importante en la actitud de las relaciones estadounidenses con las fuerzas militares centroamericanas. En el otoño de 1980, la administración comenzó una reprogramación de los fondos destinados a otras áreas con el fin de incrementar la ayuda militar suministrada a Centroamérica. De este dinero una pequeña suma fue ofrecida a Nicaragua, suma nunca utilizada por el nuevo Gobierno de este país, y la mayor parte destinada a Honduras y El Salvador. El golpe militar que en octubre de 1979 derrocó el régimen del general Carlos Humberto Romero e instaló la junta cívico-militar comprometida con reformas políticas y económicas, hizo posible el restablecimiento de los vínculos militares con El Salvador. Finalmente, US\$3.500.000 en fondos FMS y US\$400.000 en fondos IMET se pusieron a disposición de Honduras, y US\$5.700.000 en fondos FMS y US\$200.000 en donaciones IMET fueron

12. United States Arms Control and Disarmament Agency, *World Military Expenditures and Arms Transfers, 1977-1976* (Washington, D. C., 1978), p. 160.

13. Agency for International Development, p. 51.

suministrados a El Salvador<sup>14</sup>. Además, la administración Carter valiéndose de subterfugios legales, prestó a Honduras diez helicópteros UH-1H. Después de algunos debates, la administración Carter aprobó la compra por parte de El Salvador de equipo anti-motín, que incluía 7.500 granadas de gas, y 700 piezas de protección para los soldados,<sup>15</sup> utilizando para ello parte del Crédito antes mencionado.

La administración Carter intentó reabrir la posibilidad de cierta asistencia al Gobierno de Guatemala, pero los esfuerzos por promover el diálogo en este sentido fueron obstaculizados tanto por el Gobierno Guatemalteco como por una fuerte oposición dentro de los Estados Unidos.

En enero de 1980, el colapso de la primera junta de El Salvador agudizó el dilema sobre la política de los Estados Unidos hacia ese país y hacia toda Centroamérica. La violencia aumentaba rápidamente en Guatemala y en El Salvador, las relaciones con el nuevo gobierno de Nicaragua se hacían cada vez más tensas y Honduras y Costa Rica encaraban problemas económicos crecientes. Además, la posibilidad de un conflicto internacional en la región aumentaba. A las secuelas de la guerra Honduras-El Salvador de 1969 se sumaban las tensiones crecientes entre Guatemala y Belize por la independencia de esta última, y los conflictos fronterizos entre Nicaragua y Honduras. Estos últimos involucraban frecuentemente las actividades de antiguos miembros de la Guardia Nacional Nicaragüense refugiados en Honduras.

Ante esta situación, la Administración Carter empezó a enfatizar en forma creciente la importancia del respaldo de los Estados Unidos a las fuerzas armadas de El Salvador y Honduras. En marzo 25 de 1980, Franklin D. Kramer, diputado de defensa, declaró ante el Congreso los siguientes: "Frente al levantamiento terrorista y a la actividad cubana en Centroamérica, son indispensables los programas estadounidenses de asistencia militar con el fin de reenfocar y redefinir las capacidades de los países para afrontar los retos de la nueva situación de guerra. Un visible apoyo norteamericano es igualmente esencial para mantener la moral y la confianza de las fuerzas armadas de El Salvador y de Honduras. El fracaso en tal propósito traería consigo el que nuestros aliados cedieran ante los abogados de la represión, y, además, dañaría la credibilidad internacional en los Estados Unidos, lo cual limitaría aún más el grado de influencia que podríamos desear ejercer en la región en el futuro"<sup>16</sup>.

La vinculación de peticiones de ayuda para seguridad con la amenaza de subversión cubana y con la necesidad de ejercer influencia sobre las fuerzas armadas centroamericanas, cimentó una nueva e importante tendencia en la política de la administración Carter. La preocupación por los derechos humanos dejó de ser la consideración más importante, pero de ninguna manera perdió toda su influencia. En efecto, las continuas violaciones de los derechos humanos en Guatemala impidieron todo movimiento hacia la renovación de asistencia militar a esta nación. En el caso de Honduras, una mayor asistencia militar fue acompañada por continuas presiones por el retorno a la ley civil, presiones éstas que

14. Department of State, *United States Relations With Central America and the Caribbean Current Policy No. 117*, December, 1979), p. 81. Agency for International Development, pp. 47 and 51.
15. Cynthia Arnson, *Background Information on El Salvador and United States Military Assistance to Central America: Update No. 2* (Washington, D. C., November, 1980), p. 2.
16. "Statement of Franklin D. Kramer, Principal Deputy Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs, before the Subcommittee on Foreign Appropriations, Committee on Appropriations, House of Representatives", March 25, 1980.

parecían dar fruto con el éxito de las elecciones para una Asamblea Constituyente. En el caso de El Salvador una significativa cantidad de fondos IMET, re-programados, fue empleada para financiar cursos norteamericanos para oficiales salvadoreños jóvenes y para oficiales fuera de servicio activo, sobre "Aspectos de Derechos Humanos en la defensa y Desarrollo internos". Este curso de tres semanas cubrió tópicos tales como procedimientos para el manejo de prisioneros, protección de los derechos humanos de la población civil y control de poder de fuego, con el fin de "evitar poner en peligro vidas inocentes con fuego indiscriminado"<sup>17</sup>.

Para el año fiscal de 1981, la administración Carter finalmente proveyó US\$10.000.000 FMS a El Salvador y US\$5.000.000 a Honduras. Además, las dos naciones recibieron más de US\$400.000 en fondos IMET. Aun Costa Rica recibió US\$30.000 en fondos IMET reprogramados. Al mismo tiempo, los costos por cursos financiados a través del IMET fueron rebajados. El costo promedio de un curso USARSA bajó el 30.5% de 1980 a 1981 y repentinamente se posibilitó la adquisición de fondos no anticipados, lo cual trajo como consecuencia un rápido crecimiento en el número de equipos móviles de entrenamiento militar estadounidense (MTT) enviados a Honduras y El Salvador<sup>18</sup>.

En 1980 la administración Carter intentó combinar una mayor asistencia militar a El Salvador con continuas presiones por el progreso de prácticas en derechos humanos. Los asesinatos de algunos ciudadanos norteamericanos a finales de 1980 bajo circunstancias que indicaban la directa participación de las fuerzas salvadoreñas de seguridad produjeron una crisis en esta política. La asistencia militar fue suspendida en diciembre y se impuso como condición para reiniciarla el hacer progresar la investigación de los asesinatos.

Esta política duró sólo hasta la ofensiva guerrillera de enero de 1981. Enfrentada a la amenaza de la supervivencia de la junta gobernante, la administración Carter autorizó, en enero 14, el préstamo a El Salvador de seis helicópteros, a la par que el desplazamiento de catorce militares norteamericanos para entrenar a los salvadoreños en el uso y mantenimiento de dichos helicópteros. Dos días más tarde, usando la sección 506 (A) del Acta de Asistencia Foránea, el presidente Carter facilitó a El Salvador US\$5.000.000 para armas y municiones<sup>19</sup>. Este aprovisionamiento de ayuda letal al gobierno salvadoreño representó un claro alejamiento de todas las políticas previas de la administración Carter, pero proveyó una transición directa hacia la entrante administración Reagan.

## 5. La administración Reagan

A los largo de la campaña, el candidato republicano había enfatizado la necesidad de apoyar las fuerzas armadas de las "naciones amigas" enfrentadas con la amenaza de la "subversión apoyada por los comunistas". Durante el período de transición, personas vinculadas a la administración entrante en sus visitas a América Central habían confirmado a los líderes militares de la región el apoyo norteamericano. En marzo el presidente Reagan autorizó US\$25.000.000 de subvención militar a El Salvador<sup>20</sup>. Parte de esta

17. Material on course OE-9 supplied by School of the Americas, November, 1980.

18. *Ibid.* Interviews in Honduras, January, 1981, and in Panama, August, 1981.

19. "U.S. Assistance to El Salvador: Fact Sheet", prepared by State Department and distributed at September 24, 1981 Hearings on El Salvador conducted by the Inter-American Affairs Subcommittee of the House Foreign Affairs Committee.

20. *Ibid.*

suma fue utilizada para financiar el envío de MTS adicionales destinados a asistir al ejército salvadoreño en la planificación de operaciones de pequeñas unidades y al desarrollo de la incipiente Armada de El Salvador. La pequeña unidad de entrenamiento MTT fue encargada de la formación de un batallón élite de 1.000 hombres destinado a contrarrestar los esfuerzos insurgentes<sup>21</sup>.

El deseo de la administración Reagan de aumentar la asistencia a los militares salvadoreños se vió, sin embargo, limitado por restricciones de presupuesto, por la renuencia del Congreso a aprobar compromisos militares abiertos y por lo establecido en la Resolución de Poderes de Guerra. En el Congreso, las audiencias realizadas tanto en la Cámara como en el Senado en la primavera de 1981 produjeron una ola de críticas a la política de la administración Reagan y a las acciones del gobierno salvadoreño. El estancamiento en la investigación de los asesinatos de ciudadanos norteamericanos en El Salvador fortaleció aún más la oposición<sup>22</sup>.

La Resolución de Poderes de Guerra, aprobada durante la administración Nixon, requiere el visto bueno del Congreso para el desplazamiento de personal militar norteamericano a áreas en las cuales "es claro que su participación en hostilidades es inminente", o para el envío de dicho personal a territorio extranjero, "equipo para el combate". Con el fin de evitar conflicto con esta ley, la administración se ha visto forzada a mantener a todos sus consejeros militares en las ciudades principales, bajo condiciones de estrecha seguridad, evitando así que den instrucción en el campo de combate<sup>23</sup>. A pesar de tales esfuerzos, veintiséis miembros de la Cámara de Representantes presentaron a mediados del 81, una demanda Federal contra la administración, alegando que su política en El Salvador violaba la Resolución de Poderes de Guerra.

Irritados por tales restricciones, algunos militares norteamericanos empezaron a emitir afirmaciones pesimistas acerca de las capacidades de la fuerza militar salvadoreña y de las tendencias a largo plazo del conflicto civil<sup>24</sup>. Los informes acerca de la poca moral del ejército salvadoreño, el aumento de las bajas en sus filas y los continuos problemas de equipo, especialmente en el mantenimiento de los helicópteros provistos por los EE.UU., hicieron que las esperanzas en el éxito de la participación norteamericana en la actividad militar de El Salvador se tornaran cada vez más discutibles en el otoño de 1981.

A pesar de un ataque terrorista a personal norteamericano en Tegucigalpa (septiembre de 1981), las perspectivas parecían un tanto mejores en Honduras. Mientras que las solicitudes de la administración de US\$25.000.000 en créditos FMS, US\$17.000.000 en ventas directas y en términos de concesión y US\$1.000.000 en fondos IMET para El Salvador provocaron una tormenta de críticas, las solicitudes de US\$10.000.000 en créditos FMS, US\$4.500.000 en ventas directas y en términos de concesión y US\$700.000 en fondos IMET para Honduras provocaron una reacción mucho menos fuerte. El Subcomité de Asuntos Interamericanos del Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara condicionó su

21. *Foreign Assistance Legislation for FY 1982 (Part 7): Hearings Before the Subcommittee on Inter-American Affairs of the Committee on Foreign Affairs, 97th Congress, 1st Session, pp. 94-95*

22. *U.S. Policy Towards El Salvador: Hearings before the Subcommittee on Inter-American Affairs of the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, 97th Congress, 1st Session, March 5 and 11, 1981. The Situation in El Salvador: Hearings before the Committee on Foreign Relations, United States Senate, 97th Congress, 1st Session, March 18 and April 9, 1981.*

23. "U.S. Assistance to El Salvador: Fact. Sheet".

24. *Miami Herald*, September 17, 1981.

aprobación de la solicitud hondureña al continuo progreso hacia la liberación política y hacia las elecciones libres, pero reservó la mayoría de sus críticas para las propuestas de El Salvador<sup>25</sup>.

La administración ha justificado el marcado incremento de la ayuda militar a Honduras con diferentes argumentos, entre los cuales se menciona impedir el paso de suministros por Honduras hacia la subversión salvadoreña, el control de la frontera con Nicaragua y el creciente potencial de violencia interna del grupo armado de izquierda. Los críticos de esa política arguyen que ella constituye una amenaza para el proceso de retorno al mando civil, pues refuerza la influencia militar, que puede preparar a Honduras para una intervención masiva en el conflicto civil de El Salvador, y que puede ser considerada como una amenaza potencial para el gobierno revolucionario de Nicaragua<sup>26</sup>. Aún está por averiguarse cuáles serán las consecuencias definitivas. Lo que es claro es que, después de décadas de relativo olvido, Honduras ha adquirido repentinamente un lugar fundamental en la estrategia de los Estados Unidos en América Central, y que las relaciones con los militares hondureños son el corazón de tal estrategia. La totalidad de la asistencia militar solicitada para Honduras en 1982 está en segundo lugar en toda Latinoamérica, después de El Salvador.

Las relaciones de la administración Reagan con las fuerzas militares y de seguridad del resto de América Central permanecen algo confusas. En el caso de la recién independizada nación de Belize, dicha administración parece, al menos hasta el momento, satisfecha de poder dejar el caso en manos inglesas. La confusión mayor se presenta con la vecina de Belize, Guatemala.

Los militares guatemaltecos habían roto con la administración Carter y esperaban fervientemente la victoria de Reagan en 1980. Era común que se hicieran predicciones tanto en Guatemala como en Washington, en el sentido de que la iniciación de la nueva administración produciría un mejoramiento de las relaciones y el restablecimiento de la ayuda militar. Sin embargo esto no ha ocurrido. Las flagrantes violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno guatemalteco presentan serios obstáculos legales en el camino hacia tal restablecimiento. Además, una sorprendente herencia de sospecha, combinada con posiciones extremas rígidas, mantienen distanciados a muchos líderes militares guatemaltecos de los Estados Unidos.

A pesar del sombrío récord de Guatemala en relación con los derechos humanos, hay en Washington numerosos funcionarios que favorecen la reanudación de la ayuda militar. Uno de ellos es el Senador Jesse Helms, Jefe del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. En 1979 el Senador Helms recomendaba públicamente la donación de por lo menos US\$10.000.000 en asistencia militar a Guatemala<sup>27</sup>. En marzo del 81 el Secretario Asistente de Estado, John Busnell, indicó que la administración estaba "dispuesta a reiniciar la ayuda militar a Guatemala"<sup>28</sup>. A comienzos de mayo el General Vernon Walters y el Embajador Frank Ortiz asumie-

25. *Foreign Assistance Legislation for FY 1982 (Part 7)*, pp. XI and XV.

26. Joseph Bouvier, "With Sights on Nicaragua, Washington Arms Honduras", *Latinamerica Press* (July 2, 1981), pp. 1-2 and 6.

27. *Special Central American and Caribbean Security Assistance Act of 1979*, p. 11.

28. *New York Times*, May 5, 1981, p. 1.



ron una misión especial a Guatemala para discutir el mejoramiento de las relaciones y para considerar la posibilidad de permitir que Guatemala comprase repuestos para sus helicópteros HUEY UH-1H. Sin embargo, esta misión no logró romper el hielo sobre la situación de los derechos humanos.

La aprobación por parte del Departamento de Comercio de la venta de camiones y camperos militares a Guatemala, en junio, generó fuertes protestas de los grupos defensores de los derechos humanos, pero no produjo cambios visibles en las relaciones entre las dos naciones<sup>29</sup>. El censo en el momento parece ser esperar hasta las elecciones de 1982, con la confianza de que éstas traigan consigo un régimen más consecuente con los objetivos de los EE.UU.

En el caso de Nicaragua no hay disposición de parte de ninguno de los dos gobiernos para establecer lazos militares estrechos. Los ataques de la administración Reagan por la presunta participación de Nicaragua en el conflicto de El Salvador, a la par que la cada vez mayor dependencia nicaragüense de armas y entrenamiento cubanos y de países europeos orientales, han producido una creciente tensión en las relaciones. La administración Reagan ve en la adquisición nicaragüense de tanques Soviéticos y en el envío de pilotos a Bulgaria para ser entrenados en operaciones de combate aéreo, una directa amenaza contra sus intereses de seguridad en la región. Los nicaragüenses, por su parte, creen que el envío de armas norteamericanas a Honduras y las actividades de los exiliados de derecha en Centroamérica y Florida representan una amenaza a la supervivencia de su revolución y, por lo tanto, exigen un rápido crecimiento militar.

Los Estados Unidos conservan un pequeño grupo militar en Managua, pero no hay solicitudes de fondos de asistencia de seguridad para Nicaragua en el presupuesto de 1982. Las perspectivas, al menos para el futuro próximo, son de una relación dominada más por la confrontación que por la cooperación, en cuyo contexto los Estados Unidos usarán presiones políticas y aun económicas con el fin de intentar limitar el crecimiento de armas nicaragüenses e impedir su apoyo a movimientos guerrilleros regionales.

La ausencia en Costa Rica de un ejército regular no ha presentado obstáculo a la administración Reagan para solicitar US\$60.000 en fondos IMET para esa nación en el año fiscal de 1982 y para sugerir públicamente la posibilidad de una asistencia militar mucho mayor. Lo anterior ocasionó el rechazo público de tales proyectos por parte del gobierno costarricense y una disputa más bien amarga en la cual se vio envuelta la embajadora norteamericana ante las Naciones Unidas. A pesar de un claro potencial de problemas de seguridad interna y de continuas dificultades fronterizas con Nicaragua, los costarricenses parecían decididos, por lo menos por ahora, a resistir las presiones relativas a incrementar la capacidad militar de la Guardia Civil, y a establecer restricciones a sus relaciones militares con los Estados Unidos y cualquier otra nación.

## 6. Conclusión

Las relaciones de los Estados Unidos con Centroamérica han llegado casi a cerrar un círculo desde 1961. Hasta la fecha ninguno de los métodos intentados ha producido la estabilidad esperada ni el progreso hacia la profesionalización militar ni el respeto por las instituciones democráticas ni el progreso económico deseado por los responsables de fijar

29. Council on Hemispheric Affairs, *Washington Report on the Hemisphere*, (June 16, 1981), p.4.

la política estadounidense para Centroamérica. Los problemas que se han desarrollado en los primeros meses de la administración Reagan dan poca base para esperar que sus esfuerzos sean más exitosos, las preguntas básicas sobre la medida en que los EE.UU. pueden o deben influenciar el desarrollo de las fuerzas armadas de pequeños países y sobre los efectos que la ayuda militar externa puede tener a largo plazo sobre las estructuras sociales y políticas de tales países, están todavía por determinar. Hasta el momento la experiencia Centroamericana ha dado más lecciones negativas que positivas.